



RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes



Universidad
Nacional
de Quilmes

Pastore, Rodolfo E.

Un panorama del resurgimiento de la economía social y solidaria en la Argentina



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Pastore, R. E. (2010). *Un panorama del resurgimiento de la economía social y solidaria en la Argentina*. *Revista de ciencias sociales*, 2(18), 47-74. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1497>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Rodolfo E. Pastore

Un panorama del resurgimiento de la economía social y solidaria en la Argentina*

Universidad
Nacional
de Quilmes
Editorial

Introducción

En la Argentina y otros países de América Latina existe, en los últimos años, una notable presencia del debate sobre la *economía social*, ya sea bajo esta denominación u otras afines, como *economía solidaria*, *nueva economía social* o *economía popular solidaria*, por citar algunas expresiones que, si bien tienen matices diferenciados de importancia, pertenecen en conjunto al campo plural de lo que en el presente trabajo denominaremos *economía social y solidaria* (ESS).¹ La temática también se ha instalado en las políticas públicas, tanto de la Argentina como de distintos países del continente, incorporando programas y proyectos destinados a promover emprendimientos socioeconómicos.

Ahora bien, es importante destacar que este resurgimiento del debate y de las políticas públicas sobre ESS tiene un antecedente empírico previo y más profundo, el cual echa sus raíces en la expansión de iniciativas socioeconómicas autónomas de los sectores populares y sus organizaciones de apoyo, como respuesta social a los crecientes niveles de pobreza, exclusión social y precariedad laboral

* Este trabajo fue elaborado en el marco de la colaboración con los Proyectos Redes de Empresas-Redes de personas: a) Programa de apoyo al fortalecimiento del sector de empresas sociales en la Argentina (Cospe-Fado-Redesa); b) Programa de fortalecimiento del sector de empresas recuperadas en la Argentina como factor de desarrollo local de la zona sur del Gran Buenos Aires (Cospe-Fundemos).

¹ Es muy amplia la referencia bibliográfica sobre la cuestión, y se destacan entre los principales autores para América Latina: Coraggio, Gaiger, Razeto, Singer o Vuotto, entre otros.

del mundo actual. Esas iniciativas sociales han impulsado emprendimientos socioeconómicos como opciones de trabajo, ingresos y búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus comunidades de pertenencia. En el caso argentino, entre las experiencias socioeconómicas más sobresalientes de los últimos tiempos, se encuentran: las iniciativas de asociatividad en emprendimientos de la economía popular (denominados localmente “microemprendimientos”); las experiencias socioeconómicas impulsadas por los movimientos sociales y de trabajadores desocupados; las “empresas recuperadas” por sus trabajadores (que en el caso argentino cobraron una dimensión significativa antes y después de la crisis de 2001); el cooperativismo de trabajo, que ha registrado un notable crecimiento en los últimos años; el desarrollo de formas de intercambio equitativo, mercados solidarios y monedas sociales (por ejemplo Ferias Francas, Clubs del Trueque, redes de Comercio Justo, etc.); la expansión de diferentes experiencias de finanzas solidarias (particularmente los programas de microcrédito, que han cobrado un dinamismo notable en años recientes); las diversas iniciativas asociativas de inserción social o de desarrollo comunitario, como los denominados “emprendimientos sociales” y “empresas sociales”.

De allí que en este trabajo utilicemos la expresión “economía social y solidaria” para designar en un espacio común a las experiencias históricas del cooperativismo y mutualismo (conjunto también llamado “economía social tradicional”), así como a estas nuevas formas organizativas de hacer economía social (llamada “nueva economía social” o “economía solidaria”). Sin duda, dicho conjunto abarca una diversidad de experiencias, organizaciones y emprendimientos que tienen características distintivas entre sí, pero desde nuestro punto de vista, lo más significativo es que poseen una matriz identitaria de atributos compartidos, entre los que se destaca el desarrollo de actividades económicas con una definida finalidad social (en términos generales, mejoramiento de las condiciones, ambiente y calidad de vida de sus propios miembros, de algún sector de la sociedad o de la comunidad en un sentido más amplio), a la vez que implican elementos de carácter asociativo y gestión democrática en un contexto de autonomía tanto del sector privado lucrativo como del Estado.

En tal sentido, este trabajo se propone presentar una serie de cuestiones vinculadas a la expansión de la nueva ESS en la Argentina. Algunas preguntas que guían ese itinerario son: ¿a qué se debe el resurgimiento contemporáneo de la ESS? ¿Cuál es su contexto de expansión? ¿A qué tipo de problemáticas viene a dar respuesta la nueva economía social? ¿Cuáles son sus principales trayectorias empíricas?

I. El contexto contemporáneo de resurgimiento de la ESS

La hipótesis central que sostiene toda una corriente de opinión sobre el resurgimiento contemporáneo de la ESS se asocia con el cambio trascendental de época que está viviendo el mundo en materia económica en las últimas décadas y sus negativos efectos sobre la integración social, particularmente en términos de trabajo digno y acceso a servicios públicos de calidad y magnitud suficiente. Algunos elementos claves que suelen caracterizar esa transformación hacen referencia a los procesos de globalización y regionalización económica, a la creciente revolución tecnológica y comunicacional, a la crisis del Estado de bienestar o a la profunda transformación de la “sociedad salarial”. Todos esos procesos estarían repercutiendo de manera directa sobre la “metamorfosis de la cuestión social” y, en particular, sobre los problemas de empleo, condiciones de vida y trayectorias de exclusión social de amplias capas de la población, tanto en los países centrales como, con más gravedad aún, en los países periféricos, tal es el caso de la Argentina.

Dicho conjunto de transformaciones, más allá de coyunturas favorables, tienden a erosionar las raíces mismas de los compromisos sociales y de las reglas institucionales que constituían las bases del modelo de desarrollo en el mundo occidental de posguerra del siglo XX, llámese “modelo fordista” desde el punto de vista del régimen productivo de acumulación; “Estado de bienestar”, desde la perspectiva de las políticas públicas y acción estatal; o “sociedad salarial”, desde el punto de vista de la cuestión social moderna.

Desde dicha perspectiva, son estos fenómenos los que se encuentran en el centro de la problemática social en las economías occidentales contemporáneas, haciendo patente de manera dramática los límites del mercado global para generar por sí mismo una economía integradora, equitativa y socialmente responsable. No obstante, al mismo tiempo se reivindica la necesidad de un papel activo y potente del Estado, aunque tiende a ponerse en cuestión la capacidad exclusiva de este para dar respuestas socialmente apropiadas a estos dilemas. Esa puesta en cuestión del dominio estatal se basa, por una parte, en cuestiones estructurales asociadas a las transformaciones en curso de la economía global que, sin predeterminar una pérdida categórica de la soberanía estatal, generan nuevos condicionantes para su ejercicio. Por otra parte, ese cuestionamiento se asocia también a la propia lógica de acumulación de poder y de relaciones de dominancia en que pue-

de derivar la acción estatal cuando no es acompañada de manera efectiva y activa por instituciones y actores colectivos de contrapeso, transparencia y control social.

Para algunos autores, esta es una de las claves esenciales para entender el porqué de la importancia y resurgimiento de las experiencias y debates sobre la “otra economía”; a tal punto que puede hablarse de una “nueva economía social” o “economía solidaria” surgida de la acción y de las estrategias de organizaciones colectivas que desarrollan economía como respuesta social a los dilemas relacionados con los problemas estructurales de integración social que surgieron de las crisis del empleo asalariado y del Estado social tradicional. Esta “otra economía” tiene como principal horizonte de acción su finalidad social, su arraigo en comunidades territoriales, su forma de gestión autónoma y democrática y su perspectiva de sustentabilidad integral (económica, social, ambiental e intergeneracional). En tal sentido, la estrategia de esa nueva economía social podría ser un componente clave en la búsqueda por renovar las bases de sustentación de nuevos compromisos e institucionalidades solidarias y democráticas, que colaboren junto con una acción pública transparente y participativa a reconfigurar el desarrollo de sociedades más integradas en términos sociales, políticos y económicos. Esto es, un nuevo tipo de configuración de “sociedad del bienestar” que, sin dejar de considerar el lugar de los mercados en una economía mixta (es decir, economía lucrativa, economía estatal y economía social y solidaria) y más aún el papel indelegable del Estado democrático de derecho en la promoción del bien común, tienda a replantear sus lógicas de funcionamiento y acción para favorecer la expansión simultánea de los anhelos que dieron origen a la modernidad democrática de “igualdad, libertad y fraternidad”.

El contexto en la Argentina

Aproximándonos en este marco al caso de la Argentina, y más allá de los debates al respecto, puede decirse que, dentro del contexto latinoamericano, desde la década de 1940 y hasta mediados de la de 1970, la Argentina contaba con una sociedad relativamente equitativa, estructurada en torno a dos grandes ejes de integración social: el empleo asalariado y un conjunto de dispositivos estatales de servicios públicos complementarios de relativa universalización. Es decir, una sociedad donde existían bajos niveles de desempleo y subempleo, una distribución relativamente equitativa de la riqueza y una organización colectiva poderosa de la clase trabajadora, la cual además había conquistado una serie de beneficios sociales

básicos, tales como salud, educación, jubilaciones, vacaciones, derechos laborales, entre otros, que como regla general debían ser garantizados por el Estado.

Se sabe que esa economía de “desarrollo sustitutivo” tenía una serie de tensiones estructurales que fueron señaladas ya en la década de 1960 por las distintas variantes del modelo económico *stop and go*, tales como el problema de las brechas externa y fiscal, la puja distributiva o el proceso inflacionario.² Pero puede decirse que la principal dificultad de dicha sociedad radicaba en la falta de correspondencia entre la dominación económica y la hegemonía política, centrada en un conflicto de poder entre dos bloques alternativos de fuerzas sociales, que definía una condición estructural de “empate hegemónico” (Portantiero, 1973).

En contraposición, la tremenda crisis económica y social que afrontamos los argentinos en el año 2001 puso de manifiesto la cara más brutal de la exclusión económica y social, que fue pergeñándose en un proceso histórico de más de dos décadas. Sin duda, esa crisis tiene sus antecedentes directos en las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas durante la década de 1990; pero tampoco debe olvidarse que su origen histórico está anclado en los cambios socioeconómicos y de poder que trajo consigo el último golpe de Estado, la brutal dictadura militar de 1976-1983, que buscó definir esa situación de empate hegemónico a favor del bloque de poder dominante. Desde entonces, y por más de dos décadas, tendió a prevalecer un patrón estructural caracterizado, entre otras cuestiones, por la apertura indiscriminada de la economía a la globalización, la desindustrialización productiva, la tremenda concentración económica y de ingresos, el desmantelamiento y la privatización del Estado o el deterioro creciente de los servicios públicos. El neoliberalismo de la década de 1990 fue la manifestación más contundente de esas tendencias, y hoy resultan indudables los graves efectos que esos procesos trajeron aparejados sobre la situación social, y sobre las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la población.

Al respecto, una de las expresiones más dramáticas de ese deterioro ha sido el terrible crecimiento de los niveles de pobreza, precariedad laboral y desempleo, sobre todo en las regiones más densamente pobladas, como son los suburbios de las grandes ciudades de nuestro país. Si bien la recuperación económica registrada en los últimos años en un principio significó una mejora relativa en los indicadores sociolaborales, sigue resultando más que problemática la situación social y de inserción productiva de amplios sectores populares. En particular, las condiciones de vida y las posibilidades de reintegración plena de los grupos de mayor

² Es decir, una dinámica estructural que cuando la economía interna crecía, tendía al mismo tiempo a generar déficit en el comercio exterior y déficit fiscal. Véanse Diamand (1972), y Braun y Joy (1981).

vulnerabilidad social continúa siendo una de las problemáticas de mayor preocupación. Más aún en un nuevo contexto de crisis económica internacional y sus repercusiones locales, en el cual es equívoco creer que la dinámica del sistema económico formal pueda por sí misma reintegrar, vía empleo asalariado, de manera plena y estable, a tan amplia cantidad de población.

Ante esta situación, las diferentes variantes de políticas asistenciales de paliación de la pobreza, más allá de constituir respuestas para atender la urgencia y extrema necesidad, muestran sus límites estructurales como salida de más de largo plazo, no solo por el deterioro adquisitivo de dichas transferencias de asistencia, sino también por el tipo de vínculo asistencial que estas generan, al no estar asociadas al fomento de las capacidades de trabajo y relación de los propios involucrados.

De allí que la validez del reclamo por una vida mejor y un trabajo digno sigue siendo el tema principal de la agenda pública en la Argentina actual. Al respecto, y desde una perspectiva de más largo plazo, la posibilidad de proyectar e impulsar estrategias y acciones de integración social desde la ESS puede resultar no solo necesaria, sino imprescindible.

II. Las problemáticas a las cuales se busca dar respuesta

En este cuadro general, también en el caso argentino tendieron a expandirse y diversificarse en las últimas décadas los emprendimientos de la ESS, básicamente, como hemos dicho, en respuesta a las grandes transformaciones socioeconómicas en curso y a la cuestión social de allí emergente (precariedad laboral y pobreza estructural, aumento de necesidades humanas insatisfechas, fragmentación y desintegración social, etcétera).

En tal sentido, más allá de los ciclos macroeconómicos de corto plazo, en las últimas décadas son fundamentalmente tres los procesos estructurales implicados al respecto: las problemáticas de empleo; la persistencia de la pobreza estructural y la desigualdad social; los déficit en la provisión y acceso a servicios públicos de calidad.

Las problemáticas de empleo

Ya hemos señalado algunas transformaciones en el mundo de la economía y la producción con sus secuelas de agravamiento estructural de los problemas de empleo. Un marco de largo plazo in-

dica que más allá de las mejoras observadas en los últimos años, es evidente, en términos estructurales, el severo agravamiento de las problemáticas de empleo entre el modelo económico vigente hasta mediados de la década del setenta y las profundas restricciones en la dinámica del empleo asalariado originadas en un contexto más general de globalización excluyente.

En efecto, por una parte, si bien en el lustro 2003-2008 se observó una caída en los indicadores de la tasa de desocupación abierta, aun en este caso el desempleo sigue resultando un problema de magnitud particularmente importante en determinados grupos sociales, en especial, desempleados de larga duración, mujeres y, mucho más significativo aún, en el caso de los jóvenes.³

Pero es reconocido también que la problemática laboral se asienta no solo en el desempleo abierto, sino de forma creciente en la significativa importancia de diversos modos de subempleo, desprotección social, informalidad, inestabilidad y precariedad en las condiciones de trabajo. Además de la falta de aportes previsionales, seguro y salud, el empleo precario e informal tiene asociado, por lo general, remuneraciones menores que el registrado, horarios de trabajo más extendidos, peores condiciones ambientales de trabajo y elevada inestabilidad laboral. Es así que más allá del mejoramiento relativo durante los recientes años de recuperación económica, la tasa de subempleo registró un aumento en los años 2008 y 2009 (que llegó a poco más del 10%), en tanto que el empleo no registrado alcanza el 36% para este último año.⁴ Una lectura de la magnitud de esta última problemática puede realizarse, por ejemplo, en una reciente medida oficial de significación, como resulta el decreto de “asignación universal por hijo para protección social”, que al reconocer el derecho de asignación familiar por hijo para las familias que no perciban otro beneficio, pone de manifiesto también el alcance de la población comprendida en situación de falta de empleo o precariedad laboral.⁵

En este marco, la presente coyuntura económica mundial pone aún más en el tapete la centralidad de la problemática. En efecto, a pesar de las leves mejoras registradas en los indicadores económicos de algunas de las principales economías occidentales, son aciagos los efectos de la crisis económica en el empleo, y se proyecta a nivel mundial un incremento sustancial del número desempleados, empleos vulnerables y trabajadores pobres.⁶ América Latina en general, y la Argentina en particular, no están exentas de estos efectos.⁷ De hecho, se estima que en el año 2009 la economía de América Latina y el Caribe tuvo una caída del 1,8%, en tanto que el PBI per cápita cayó el 2,9% (CEPAL, 2009, p. 13). Por su parte, en el caso de nuestro país, se registró una de las mayores desacele-

³ En efecto, en 2007, mientras que el promedio de desempleo fue del 8,5%, en el caso de los hombres era solo del 6,7%; en el de las mujeres, del 10,8%; y, más grave aún, en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años ascendía al 26% (CEPAL, 2008).

⁴ Véase *Boletín de Estadísticas Laborales*, disponible en <www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/bel/index.asp>.

⁵ Decreto PEN 1602/09, “Asignación universal por hijo para protección social”.

⁶ Según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, *Tendencias mundiales del empleo*, en los tres escenarios proyectados para 2009 se sumaban al desempleo entre 8 y 30 millones de personas (OIT, 2009a).

⁷ Según el mencionado informe, por primera vez desde 2003 se registraría en América Latina un aumento del nivel de desempleo, sumándose a este entre 1.5 y 3.0 millones de personas.

raciones, al pasar de un crecimiento de 6,8% en 2008 a solo el 0,7% en 2009 (CEPAL, 2009, p. 85). En este contexto regional y local de fuerte caída del crecimiento económico, tiende a agravarse el cuadro del mercado laboral (sobre todo en subempleo, informalidad y precariedad laboral), con un mayor impacto sobre los hogares de bajos ingresos y los grupos socialmente más vulnerables.

Justamente las nuevas experiencias de ESS que se han expandido en las últimas décadas son una respuesta social a dicha problemática. Una respuesta efectiva, vale decirlo, de amplia magnitud que no solo genera iniciativas de trabajo para amplios colectivos sociales expulsados del mercado laboral, sino que al mismo tiempo tiende a reconstituir la significación social del esfuerzo y el trabajo, de las capacidades, potencialidades y expectativas de los involucrados, así como a fortalecer sus tramas relacionales y socio-vinculares de solidaridad y apoyo mutuo.

Pobreza y desigualdad

Otro de los elementos contextuales fuertemente negativos lo constituye la persistencia estructural de altos niveles de pobreza y elevada desigualdad social. En efecto, aunque superados los peores momentos de la crisis (2001-2003), es cierto que los actuales indicadores de pobreza están por encima de los registrados a principios de la década de 1990 y comprometen a, por lo menos, diez millones de personas.

Debemos considerar que esta cuestión no solo se vincula con las problemáticas estructurales de empleo comentadas en el punto anterior, sino también con la creciente desigualdad de la sociedad argentina de las últimas décadas. Ello puede observarse de diversas maneras. Por ejemplo, en una comparación internacional, entre la década de 1970 y la presente, no solo se observa una considerable pérdida del ingreso promedio de la Argentina en comparación con los países desarrollados; lo más significativo es el mayor decrecimiento sufrido por los sectores de menores ingresos.⁸ Por otra parte, aun teniendo en cuenta la mejora relativa en la distribución del ingreso en comparación con los peores momentos de la crisis (2002), en una mirada de largo plazo la disparidad de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población pasó de cerca de 12 a 1, en la década de 1970, a cerca de 30 a 1 en la actualidad. A su vez, mientras esta franja más enriquecida se queda hoy con el 34,4% de la riqueza, la población más pobre apenas se lleva el 1,2% del total (Kosacoff, 2009).

En resumen, en una perspectiva estructural de largo plazo, los niveles de desigualdad social resultan muy elevados y, al mismo

⁸ Así, si entre 1970 y 2000 el ingreso promedio de la Argentina en relación con los países desarrollados descendió poco más de veinte puntos (es decir que, mientras en la década de 1970 el ingreso promedio de nuestro país representaba el 67% de los desarrollados, en la presente década cayó al 40%), en el caso de los sectores de menores ingresos esa caída fue mucho más pronunciada aún, y pasó de representar casi un 50% en la década de 1970 a solo el 16% en la actualidad (Kosacoff, 2009).

tiempo, tienden a persistir profundos problemas de pobreza en una proporción muy importante de la sociedad argentina. En tal sentido, las nuevas experiencias de ESS en la Argentina son una de las principales expresiones sociales de respuesta a dichos problemas, pues los distintos tipos de experiencias socioeconómicas, por regla general, buscan integrar a los colectivos socialmente más desfavorecidos, planteando alternativas concretas de distribución más equitativa de ingresos. Al mismo tiempo, ello no significa condenar a la ESS a una economía “de pobres para pobres”, sino que uno de los principales desafíos resulta plantear estrategias y senderos efectivos de consolidación y expansión de la ESS como un sistema específico dentro de una economía mixta.

Déficit en la provisión y acceso a servicios sociales y residenciales

Junto a las problemáticas de empleo, pobreza y desigualdad social que venimos considerando, otra de las características sobresalientes desde una perspectiva de mediano plazo es la transformación estructural regresiva del Estado que se inició a fines de la década de 1970 y se profundizó en la de 1990. Si bien se observan cambios considerables en los últimos años en la intencionalidad, discurso y acción de la política pública (en particular de los programas sociales y de desarrollo local), lo cierto es que en términos estructurales preexiste una profunda descomposición de los servicios públicos y bienes de salario indirecto, persistiendo severas dificultades de acceso a servicios sociales, educativos, sanitarios y residenciales de calidad por parte de los sectores socialmente más vulnerables.

En tal sentido, es reconocido que las situaciones de pobreza y exclusión social, además de estar relacionadas con las dinámicas de trabajo y distribución del ingreso, se vinculan también con las capacidades de acceso a bienes y servicios de satisfacción de necesidades, en particular de acceso a bienes públicos. Al respecto, los trabajos que abordan esta problemática muestran un cuadro de graves restricciones en la satisfacción de necesidades y en el acceso a servicios públicos de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. Así, por ejemplo, algunos estudios sobre los hogares en situación de pobreza indicaron que las principales restricciones se presentaban en la carencia de servicios residenciales básicos, inadecuada asistencia médica y sanitaria, importantes déficit de seguridad pública, falta de servicios educativos con enseñanza de nuevas tecnologías y escasa cobertura de planes o programas sociales.⁹ Es decir, un significativo conjunto de restricciones de accesibilidad

⁹ Así, sobre un cálculo estimado de 3.5 millones de hogares que para el Observatorio de la Deuda Social Argentina (2009) representan el núcleo duro de la pobreza urbana, se señala que el 89% tiene déficit de acceso a los servicios residenciales básicos; el 68% no tiene seguro de salud (pre-paga u obra social) y el 50% no accede a asistencia médica por problemas económicos; el 48% no accede a clases de computación en la escuela; el 47% tiene déficit de acceso a servicios de seguridad pública (con más de 2 de cada 10 hogares que sufren hechos de violencia o delincuencia) y el 60% no recibe ningún programa o plan social.

que perjudican o ponen en serio riesgo las oportunidades, las condiciones de vida y la dignidad de la población afectada.

En ese contexto de pobreza urbana también se ha generalizado un grave cuadro de degradación ambiental, del hábitat y de la infraestructura básica (véase FADU, s/f), así como tendencias psicosociales de baja confianza institucional, dificultades de relacionamiento social, deterioro de sentido hacia futuro o malestar psicológico en un considerable núcleo de personas.¹⁰

De allí que se necesite una fuerte inversión social para atender estas necesidades, con políticas públicas de carácter universal, pero también integradas, territorializadas y de atención específica a las problemáticas de cada grupo. Entre esas políticas, resulta clave la articulación, apoyo y promoción sustantiva de las iniciativas asociativas de emprendimientos que han surgido como respuestas sociales a estas problemáticas. Este es el caso particular de los nuevos tipos de emprendimientos de la ESS, que vienen desarrollando otras maneras de gestionar los servicios de atención de demandas emergentes de la sociedad, incluyendo diversas modalidades de gestión social reactivas al monopolio operativo gubernamental. En dichas trayectorias, los servicios sociales ya no quedan bajo dominio exclusivo de gestión operativa estatal, más allá de requerir un fuerte impulso de su parte en términos de definición de políticas públicas concertadas, facilidades y promoción de la actividad o adecuados niveles de financiamiento y de regulación pública del servicio. Por ello dichas iniciativas muestran nuevas modalidades de articulación estatal-organizaciones ciudadanas, las cuales no solo permiten mejorar el alcance e impacto de dichos servicios, sino también potenciar las capacidades de los destinatarios. Entre este tipo de experiencias, se destacan las iniciativas que proveen servicios de proximidad a las comunidades (tales como atención domiciliaria, cuidados sociosanitarios, nuevos servicios educativos, preservación y mantenimiento del ambiente, etc.) o la inserción de colectivos en distintas situaciones de vulnerabilidad social (personas con problemas estructurales de inserción laboral, en proceso de recuperación de adicciones, personas en situación de calle, personas con discapacidad física o mental). Así, este tipo de iniciativas resulta una trayectoria empírica relevante en un camino que tienda a renovar las bases de reconfiguración del Estado social y brinde nuevas respuestas colectivas a las necesidades sociales emergentes.

Avanzado ya este cuadro contextual, a continuación hacemos revista de esa pluralidad de trayectorias empíricas de la ESS, para señalar luego algunas tendencias presentes en el caso de las nuevas iniciativas de la Argentina.

¹⁰ En tal sentido, dicho estudio sobre la deuda social señala (siempre para la misma población pobre de referencia) que más de dos tercios tienen desconfianza en los partidos políticos, sindicatos e instituciones gubernamentales; más de un tercio, en las instituciones de la sociedad civil; y cerca de un quinto, en los medios de comunicación. En la dimensión subjetiva, casi la mitad dice no poder pensar proyectos a futuro; un tercio dice no saber qué hacer con su vida, y más de un quinto evidencia riesgo de malestar psicológico (depresión). Y en los aspectos de relacionabilidad social, más de la mitad no cuenta con otros para resolver sus problemas ni para recibir apoyo emocional; un tercio no cuenta con tiempo libre o no sabe qué hacer con él, y otro tercio usa el tiempo libre para ver televisión.

III. La pluralidad de la economía social y solidaria

Este es el marco en el que se inscriben las estrategias y acciones de la “otra economía” o economía social y solidaria en el caso argentino. En otro trabajo (Pastore, 2006), hemos desarrollado que la expresión “economía social” no tiene un único sentido, sino que, como han puesto de manifiesto varios autores, constituye un término polisémico que designa distintos niveles de cuestiones.¹¹ Por nuestra parte, en el trabajo referido proponemos tres dimensiones analíticas: una dimensión de trayectorias empíricas de otra forma de hacer economía, de creciente importancia y diversidad en las últimas décadas; una dimensión conceptual que denota un enfoque alternativo a la “economía de los economistas convencionales”; una dimensión propositiva de proyectos alternativos de sociedad.

Por cuestiones de espacio y objetivos analíticos, en este trabajo nos detendremos en la primera de dichas dimensiones, referente a las trayectorias empíricas. Como hemos adelantado, en este caso el término economía social y solidaria busca designar un conjunto heterogéneo de emprendimientos económicos que se han ido desarrollando de manera diferenciada a la típica empresa capitalista y a las formas de organización estatal, aunque también a las iniciativas desconectadas de la economía popular de subsistencia. Desde este punto de vista, la ESS se constituye por entidades u organizaciones que realizan actividades económicas (es decir, de producción o distribución de bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras), pero cuya principal finalidad se orienta al bienestar humano y que, al mismo tiempo, contemplan elementos organizativos de autogestión asociativa y democrática, así como vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia. En otras palabras, sus acciones se orientan a mejorar la calidad de vida, tanto de sus integrantes como de su comunidad de pertenencia, privilegiando para ello a las personas, sus capacidades y vinculaciones. Al respecto, reproducimos un esquema sintético de clasificación de esa diversidad de tipos de emprendimientos de la ESS (véase cuadro 1).

Es reconocido que, en términos de trayectorias concretas, sus antecedentes asociativos más relevantes se remontan a la primera mitad del siglo XIX, como respuesta a los efectos sociales negativos de la Revolución Industrial, y se expresaron desde entonces en diversas experiencias cooperativistas, mutualistas y de asociacionismo obrero y popular, una trayectoria que en muchos contextos nacionales ha sido denominada “economía social” y que como

¹¹ Otras aproximaciones al carácter polisémico de la economía social como enfoque teórico e histórico, disciplina y tipos de organizaciones pueden verse en Bastidas-Delgado y Richer (2001), Chaves (2003a), Lévesque y Mendell (2003).

Cuadro 1

Economía social tradicional o histórica
<i>Cooperativas</i> de trabajo, agropecuarias, servicios públicos, vivienda, consumo, crediticias y bancarias, de seguros, de provisión profesional.
<i>Mutuales</i> entre otras en actividades como: proveeduría, vivienda, salud; educativas y culturales, previsionales, deportes, guarderías, seguros, hogares, sepelios y velatorios, turismo.
<i>Asociaciones</i> socioeconómicas que producen o proveen bienes o servicios de diverso tipo.
Nueva economía social
<i>Producción-servicios</i> : empresas recuperadas; nuevas cooperativas de trabajo; emprendimientos asociativos de la economía popular, etcétera.
<i>Intercambio</i> : experiencias de ferias sociales, ferias francas, comercio justo, mercados de moneda local, club del trueque.
<i>Finanzas solidarias</i> : entidades de microcrédito y microfinanzas, fondos rotatorios, banca social, banca ética.
<i>Sociales</i> : iniciativas económicas comunitarias, socioambientales; empresas sociales (inserción, servicios sociosanitarios); emprendimientos socioculturales; redes de ayuda mutua, asociativismo rural y comunal, etcétera.

Fuente: Pastore (2006).

hemos dicho también suele llamarse “economía social histórica o tradicional”.¹² En el caso argentino, el desarrollo de este tipo de economía social fue significativa desde fines del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, tanto en el asociacionismo de sectores populares e inmigrantes (por ejemplo, con las sociedades de socorros mutuos de españoles, italianos u otras colectividades de inmigrantes) como con el desarrollo del cooperativismo en sectores como el agropecuario o el de consumo. Como en otros contextos nacionales, desde la década de 1940, la expansión del mercado, por una parte, y del Estado social, por otra, hizo perder peso relativo al cooperativismo y a las asociaciones de ayuda mutua, al no adaptarse a las condiciones establecidas por las dinámicas de estos sectores.

Como hemos señalado, desde fines del siglo XX sobresale también en la Argentina el surgimiento de una “nueva economía social” en la agenda pública contemporánea, la cual se ha expandido básicamente como respuesta social a las problemáticas que

¹² Entre otras referencias históricas pueden verse los textos de Levesque y Mendell (2003) y Chaves (2003b).

trajo aparejada la globalización excluyente y el desguace del Estado social, reseñadas en el apartado anterior. El conjunto de dichas iniciativas y experiencias pasó a denominarse “economía solidaria” y ha replanteado de manera práctica la relación entre economía, sociedad y Estado democrático, reivindicando la relación entre lo económico, lo sociocultural y lo político desde un punto de vista de autogestión y de acción solidaria. Es así que, como muestra el cuadro 1, desde un punto de vista empírico podemos llamar “economía social y solidaria” al conjunto de experiencias que incluyen tanto a las experiencias históricas de la economía social presentes hoy en día como a la diversidad de trayectorias alternativas de hacer economía que se expandieron en las últimas décadas del siglo XX.

IV. Las trayectorias de la nueva economía social en la Argentina

En este contexto evolutivo pueden señalarse tres grandes trayectorias evolutivas de esta nueva economía social, las cuales responden a diferentes historias constitutivas de lo socioeconómico: la economía popular solidaria, las iniciativas comunitarias o asociativas de integración social, y la organización del trabajo autogestivo colectivo.

De la economía informal hacia la economía popular solidaria

En las estrategias de subsistencia de los sectores populares, tanto en las grandes urbes de la Argentina como en otras ciudades del continente, pasaron a tener una mayor incidencia las actividades de autoempleo o el desarrollo pequeños emprendimientos económicos, particularmente con el crecimiento del denominado sector informal. Es decir, emprendimientos, en general, de base familiar o de relaciones de proximidad, con fuerte peso en el sector de servicios o en actividades de oficio y con un alto grado de informalidad o de economía no registrada. Sin duda, estas iniciativas en sí mismas no forman parte de la ESS. Por ello en los países centrales no se encuentran insertas en estrategias de desarrollo de economía social, a pesar de tampoco integrar el sector típicamente capitalista, sino más bien un conjunto variado de iniciativas económicas de autoempleo, artesanado o pequeñas unidades socioeconómicas familiares. Sin embargo, entendemos que en el caso de América Latina la situación resulta muy diferente, ya que una parte importante de la economía popular está siendo apoyada cada vez más

por organizaciones territoriales, movimientos sociales o entidades de apoyo, con el objeto de ganar en asociatividad, articulación vertical y horizontal, capacidad de relacionamiento, acceso a recursos y tecnología, etc. En otras palabras, las experiencias de la economía popular están siendo incluidas en una estrategia más amplia de desarrollo de la ESS, a tal punto que puede hablarse, como en el caso de Brasil, de una “economía popular solidaria”, al impulsarse un conjunto de acciones concretas para incluirla en un proyecto de ESS que implique al mismo tiempo una transformación de dicha economía popular con sentido solidario, organización colectiva y gestión democrática. Sin duda ello obedece al significativo peso que la economía popular tiene en los países latinoamericanos, particularmente el amplio sector informal urbano y los pequeños productores rurales familiares y campesinos, lo que lleva a la necesidad de integrar a estas experiencias en estrategias de desarrollo asociativo que les permitan sortear las limitaciones de escala productiva, disponibilidad de capital de trabajo, dificultades de acceso a mercados de mayor valor agregado, escaso poder de compra individual, o incorporación y generación de innovaciones tecnológicas.

Entre los ejemplos que pueden señalarse al respecto, se encuentra el apoyo técnico o financiero para avanzar hacia formas asociativas entre pequeños productores urbanos o rurales con el objetivo de ganar eficiencias colectivas en la producción (tal como la cuasi integración productiva en algunas experiencias de cadenas valor, por ejemplo, en indumentaria, muebles, apicultura, etcétera).

De igual forma, puede mencionarse el desarrollo de canales de comercialización y mercados solidarios con el objetivo de mejorar la inserción mercantil de los emprendimientos, ganando en escala y regularidad de ventas o nuevos segmentos de consumo. Tal es el caso, por ejemplo, de las ferias francas –que han tenido un gran desarrollo en varias provincias del nordeste argentino, en especial, en la provincia de Misiones–, las cuales vinculan de manera directa a pequeños productores rurales con consumidores de ciudades intermedias.

En el mismo sentido pueden mencionarse distintas experiencias de construcción organizativa de personas que trabajan en recolección y reciclado de residuos urbanos, los denominados “cartoneros”, actividad informal que creció de manera significativa a partir de la crisis socioeconómica, a pesar de ser marginada por la sociedad, sumamente precaria, de bajos ingresos y con muy malas condiciones de trabajo. De hecho, las experiencias de constitución de cooperativas u otras formas asociativas de este sector buscan mejorar en condiciones laborales, etapas de la cadena de reciclado de

mayor valor agregado, poder de negociación económica, incidencia política o fomento de dispositivos que faciliten la clasificación, recolección y reciclado de residuos en territorios específicos en articulación con los residentes del lugar. Un ejemplo de interés a nivel nacional de este crecimiento organizativo lo constituye el Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y Recicladores (MOCAR), del que se presenta una síntesis en el cuadro 2.

Cuadro 2

Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y Recicladores (MOCAR)
El MOCAR nace en 2003, a partir de la confluencia del trabajo previo y el encuentro de distintas organizaciones del sector, y logra su personería jurídica en 2006. El movimiento está integrado por 75 organizaciones en todo el país, de las cuales 36 son cooperativas, 26 son asociaciones civiles, y 13 son organizaciones de base de cartoneros o carreros. El movimiento fomenta el reconocimiento de la comunidad y los gobiernos de la actividad realizada por cartoneros, recuperadores y recicladores como socialmente útil y necesaria. Socialmente útil, porque recupera cientos de miles de toneladas diarias de materiales, que si se recuperan y reciclan se convierten en riqueza y generan empleo genuino. Necesaria, porque esta tarea disminuye la contaminación, al evitar que esos materiales recuperados se entierren o se quemen en basurales a cielo abierto. Entre sus principales objetivos se encuentran: la creación de una organización sindical representativa de los trabajadores de recuperación, reciclado y tratamiento de los residuos sólidos urbanos; la promoción de un convenio colectivo de trabajo que regule la actividad del sector; el adecuado tratamiento impositivo de los materiales y emprendimientos del sector, para favorecer su registro y evitar que se tribute varias veces el mismo impuesto; el fomento de la separación en origen y reciclado de los residuos; el impulso a la construcción de plantas de separación, clasificación y reciclado de residuos, administradas en forma cooperativa por los mismos recuperadores; el desarrollo de programas de formación integral y capacitación continua de sus miembros. En el sur del Gran Buenos Aires, el MOCAR realiza actividades complementarias, como programas de microcrédito, e integra un espacio de gestión compartida en economía social y desarrollo local con la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Quilmes.

Fuente: <<http://cartonerosmocar.blogspot.com>>.

Otra trayectoria de apoyo a la economía popular bajo una estrategia de economía social y solidaria la constituye el avance al financiamiento solidario dirigido a pequeños productores urbanos y ru-

rales, el cual se ha extendido de manera significativa en los últimos años, en particular, en la forma de programas de microcrédito. En efecto, si bien en relación con otros países de América Latina este desarrollo es reciente y con un menor grado de cobertura respecto de la demanda potencial de crédito de los sectores que no acceden al sistema financiero formal, el dinamismo del sector resulta sumamente importante en la presente década.

El mapa actual de las instituciones que actúan en el sector es mucho más complejo y rico que en la década anterior, y se calcula que existen más de trescientas entidades que desarrollan programas de microcréditos con una cartera activa de 100 millones de pesos, que brindan este servicio financiero a más de 55.000 emprendedores de la economía popular (Higa, 2008). Esa variedad de entidades incluye organizaciones internacionales, bancos comerciales, organizaciones no gubernamentales dedicadas a las microfinanzas, organizaciones territoriales que desarrollan programas de microcrédito junto con otras actividades de promoción socioeconómica y comunitaria. En ese sentido, se destacan dos programas públicos de la última década que tendieron a impulsar las actividades microcrediticias de este tipo de organizaciones.

Por una parte, en el año 2002 se creó, en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, el programa denominado Banco Popular de la Buena Fe (BPBF), que entre dicho año y 2007 otorgó de manera descentralizada 23.000 créditos a unos 20.000 prestatarios (Ministerio de Desarrollo Social, 2008). Para este último período, el BPBF contaba con 65 organizaciones regionales de coordinación y 443 organizaciones locales que desarrollaban en todo el país programas de microcrédito. La mayoría de estas organizaciones locales se formaron en el proceso de eclosión de la crisis socioeconómica argentina (el 61% lo hizo del año 2000 en adelante) y desarrollan esta actividad de manera complementaria a otras funciones de promoción socioeconómica, tales como promoción social, educación y capacitación, promoción laboral, cultural y de salud.

Por otra parte, en el año 2006 se promulgó la Ley de Promoción del Microcrédito, mediante la cual se creó un programa específico con un fondo nacional de unos 100 millones de pesos, para apoyar programas de microcrédito desarrollados por entidades sin fines de lucro que colaboran con el desarrollo de las políticas sociales y se asocian en consorcios o redes territoriales para implementar los fondos otorgados.¹³ Dichos fondos se aplican a la capitalización de instituciones adheridas, subsidiándose total o parcialmente la tasa de interés, gastos operativos y de asistencia técnica, eximiéndose también de cargas fiscales tales como el

¹³ El denominado Programa Nacional del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social "Padre Carlos Cagade", el cual es administrado por la Comisión Nacional de Coordinación de Microcrédito dependiente del mismo Ministerio de Desarrollo Social.

impuesto a las ganancias o al valor agregado. Un elemento interesante desde el punto de vista de convergencia organizativa es que las organizaciones que se postulan para acceder a dichos fondos deben asociarse entre sí territorialmente, ya sea en redes de microcrédito (cuando no participan organismos del Estado) o bien, consorcios (cuando además de las entidades no gubernamentales también las integran los gobiernos locales o provinciales). En los cuadros 3 y 4 presentamos una síntesis de dos experiencias de la Provincia de Buenos Aires: el Consorcio de Gestión Compartida para el Desarrollo Local y la Red del Conurbano Sur.

Cuadro 3

Consorcio de Gestión Compartida para el Desarrollo Local de la Provincia de Buenos Aires

El Consorcio de Gestión Compartida para el Desarrollo Local es el resultado del trabajo conjunto del gobierno de la provincia de Buenos Aires con organizaciones de la economía social y solidaria que viven en su territorio. El espacio se generó ante la necesidad de pensar, formular y ejecutar políticas públicas, y de que el Estado y organizaciones, sin delegar sus respectivos niveles de responsabilidad, promuevan y apoyen procesos de desarrollo local inclusivo, mediante la participación activa de los actores de la economía social en sus territorios, administrando en forma conjunta fondos de la Ley Nacional de Microcrédito.

El Consorcio se propone fortalecer organizaciones, redes de organizaciones y municipios que lleven adelante estrategias de microfinanciamiento, de comercialización popular, de consumo asociado, de capacitación y asistencia a los productores y emprendedores, para fortalecer el crecimiento del sector de la economía social y solidaria (ESS) en el ámbito urbano, periurbano y rural de la provincia.

Sus líneas de acción son: a) fondeo a organizaciones para el desarrollo de actividades de financiamiento a los actores de la economía social; b) fortalecimiento institucional y consolidación de capacidades de construcción territorial; c) apoyo a infraestructura productiva y de comercialización para los actores de la ESS.

Integrantes: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Fideicomiso Programa Fuerza Solidaria (Gobierno de la Provincia, Banco de la Provincia e Instituto Provincial de Loterías y Casinos), Asociación Civil SEDECA (Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, Mesa Abierta), Asociación Civil Ayuda Solidaria (Tandil y Centro de la provincia de Buenos Aires, Bancos Populares de la Buena Fe), Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires (Cooperativa Agropecuaria Asociación de Productores Familiares de Florencio Varela y Asociación Civil CEDEPO).

Fuente: <<http://www.consorcioba.com.ar>>.

Cuadro 4

Red Conurbano Sur

La Red Conurbano Sur (RCS) nace en el año 2006 ante la necesidad de articular acciones concretas en el territorio de las nueve entidades que la integran, las cuales desarrollan programas de microcrédito y acciones desde la óptica de la economía social en los partidos de Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes.

Las entidades que conforman la RCS actúan socialmente en una amplia gama de problemáticas vinculadas a las necesidades de los sectores populares (niñez, adolescencia y juventud, tercera edad, mujer y género, etc.), pero todas ellas han encontrado en el microcrédito un instrumento que les permite contribuir a mejorar la economía y reproducción social de las familias y comunidades con las que trabajan. De tal forma, el microcrédito es concebido y operado en la Red como una herramienta de promoción socioeconómica, la cual se dirige principalmente a financiar capital de trabajo (adquisición de materia prima, insumos y mercaderías) de más de mil emprendimientos socioeconómicos populares de dichos distritos.

Así, bajo la figura de “red de gestión asociada”, administra fondos públicos en el marco de la Ley N° 26.117 de promoción del microcrédito, a través del vínculo institucional con la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social.

Pero la RCS tiene una perspectiva más amplia en su accionar e integra estas líneas de microcrédito con otras líneas de financiamiento y apoyo al sector.

Por una parte, de manera complementaria, ha implementado otras líneas de finanzas solidarias, tales como créditos de mayor tamaño para la reconversión tecnológica o la incorporación de maquinarias y equipos, así como líneas especiales de financiamiento para oportunidades de negocio que fortalezcan el desarrollo económico local y generen mejores posibilidades de desarrollo sectorial. Tal es el caso del financiamiento de las “rondas de negocios” o círculos de crédito recíproco entre emprendimientos de la economía social, como espacio de compra-venta del sector que genera nuevos canales de comercialización y mejora la vinculación entre productores y revendedores de los sectores de indumentaria, calzado y accesorios del mismo territorio.

Además de estas líneas de financiamiento, incluye otras líneas de trabajo complementarias, tales como capacitación, asistencia técnica, asesoramiento y acompañamiento permanente.

Entidades participantes: Asociación Civil Nuestro Espacio Abierto, Cáritas Quilmes, Centro de Capacitación de la Comunidad Taller San José, Comedor Infantil Contra Viento y Marea, Centro Cultural y Biblioteca Popular Daniel Ayala, Asociación Civil Amigos para Ayudar, Asociación Civil EMAC, y Asociación Civil Horizonte Propuestas para el Desarrollo Humano.

Tres de estas entidades integran a su vez la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Quilmes: Asociación Civil Horizonte, EMAC y Cáritas Quilmes.

De la organización comunitaria a las estrategias socioeconómicas

Además del apoyo a las iniciativas de la economía popular, en los últimos años irrumpió también una diversidad de prácticas socioeconómicas de carácter asociativo o comunitario que crearon nuevas formas organizativas o reconfiguraron las preexistentes y pasaron a desarrollar actividades económicas orientadas a la integración social.

En efecto, en términos sintéticos puede decirse que emergieron también dos tipos de iniciativas asociativas en las comunidades locales: por una parte, aquellas orientadas a la inclusión social de colectivos en situación de extrema vulnerabilidad sociolaboral, tales como personas con problemas estructurales de inserción laboral, jóvenes en proceso de recuperación de adicciones, personas en situación de calle, ex convictos, personas con discapacidad física, usuarios de servicios psiquiátricos y de salud mental, etc.; por otra, aquellas iniciativas socioeconómicas que buscan dar nuevas respuestas a las necesidades sociales emergentes, particularmente de comunidades populares, en alimentación, salud, educación, cultura o problemas socioambientales.¹⁴

Bajo la denominación de “emprendimientos asociativos” o “empresas sociales”, estas experiencias muestran una dinámica emergente de interés y potencialidad, a pesar de que aún no cuentan con legislación específica de cooperación social, como sucede en otros países –tal es el caso pionero de Italia, y otros más recientes y cercanos, como Brasil o Uruguay. Un ejemplo al respecto lo constituyen cerca de veinte experiencias de este tipo vinculadas a un proyecto de promoción de empresas sociales y a una red local específica (véase cuadro 5).

En tal sentido, las experiencias vinculadas a dicho proyecto pueden catalogarse según las problemáticas que abordan en dos tipos principales: la inclusión social de grupos vulnerables, integrándolos en emprendimientos sociolaborales, y la atención de necesidades sociales emergentes, desarrollando para ello actividades que generan puestos de trabajo.

Como puede verse en el cuadro 6, en este caso son más las que se dedican a la primera de las finalidades, ya que tres de cada cuatro empresas tienen como orientación principal la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social específica. En efecto, este grupo de empresas asociativas que se dedican a la inclusión social trabajan con colectivos afectados por situaciones específicas de desventaja, entre los cuales sobresalen, por la cantidad de empresas implicadas, los grupos de jóvenes en condiciones

¹⁴ Por ejemplo, hay varias experiencias de emprendimientos sociales que trabajan en temas ambientales tales como limpieza, desmalezamiento y saneamiento de arroyos en zonas socioambientalmente degradadas del Gran Buenos Aires.

de riesgo social, las personas (jóvenes y adultos) con discapacidades físicas o mentales, o la población que vive en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, los otros dos grupos de destinatarios son ex presidiarias y personas con padecimientos oncológicos, mientras que en otros casos de la Argentina, además de los grupos mencionados, también hay importantes experiencias en servicios de salud mental o personas en proceso de recuperación de adicciones.

Cuadro 5

Proyecto Redes: fortalecimiento de empresas sociales y REDESA (Red de empresas sociales argentinas)

El Proyecto Redes de Empresas-Redes de Personas: Programa de apoyo al fortalecimiento del sector de empresas sociales en la Argentina es una iniciativa de cooperación entre Italia y la Argentina con el objetivo de favorecer el fortalecimiento del sector en sus aspectos productivos, sociales e institucionales. En el plano institucional se propone contribuir a la consolidación de REDESA, espacio compartido por un conjunto de organizaciones que promueven el desarrollo sostenido y solidario del sector de empresas sociales en nuestro país. REDESA nace en el año 2000 y está formada por veinte empresas sociales de diferentes rubros, tanto en el ámbito productivo como en el sector de servicios. Todas estas empresas que la integran trabajan con grupos vulnerables, ofreciendo oportunidades de inserción laboral y social. Están integradas por más de 300 socios activos; dan trabajo a más de 200 personas en sus organizaciones y coordinan más de 340 voluntarios en sus actividades productivas, sociales y culturales. Operan y producen en los rubros de: panificación, servicio de catering; periodismo gráfico, arte y cultura; serigrafía, estamparía y artesanías; reciclado de residuos; movimiento de suelo y parquización.

Participantes del Proyecto: COSPE Conosur (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), FADO (Federación de Agrupación de ONG), REDESA (Red de empresas sociales argentinas).

Fuente: <<http://www.redesa.com.ar>>.

Un rasgo diferenciado de este tipo de iniciativas de la economía solidaria es que, por lo general, articulan al mismo tiempo alguna combinación de bienestar de la comunidad, integración social y potenciación de capacidades humanas de los implicados, incluyendo, como hemos dicho, una diversidad de experiencias que van desde las iniciativas asociativas comunitarias para atender necesidades socioeconómicas de sus territorios de origen hasta este tipo de emprendimientos asociativos de inserción sociolaboral.

Cuadro 6. Emprendimientos según problemática que busca atender

Tipo de problemática		Porcentaje	
Inclusión social	Jóvenes en riesgo	23%	
	Personas con discapacidad	23%	
	Personas en situación de calle	18%	
	Otros grupos (ex presidarias, pacientes oncológicos)	12%	
Subtotal inclusión			76%
Trabajo o demanda social	Trabajo y medioambiente	18%	
	Atención demanda social (comunicación comunitaria)	6%	
Subtotal trabajo y demanda social			24%
Total			100%

Fuente: Pastore (2009).

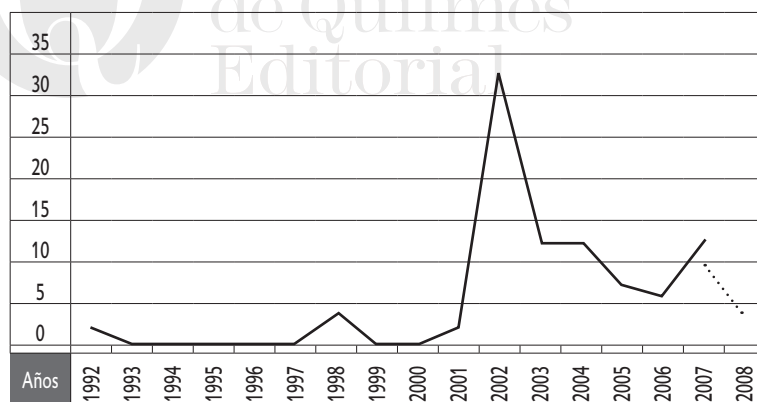
Cooperativismo de trabajo y empresas recuperadas

Una tercera trayectoria de importancia es el crecimiento del peso relativo de las cooperativas de trabajo dentro de la socioeconomía institucionalizada, particularmente las nuevas cooperativas de trabajo autogestivo, vinculadas a políticas públicas de hábitat y desarrollo urbano local, las cuales en algunos casos son articuladas por movimientos sociales territoriales. En efecto, reciente información disponible indica que sobre un total de 8.800 cooperativas vigentes al año 2006, casi 5.300 habían declarado como objeto social ser cooperativas de trabajo. El número de trabajadores declarados también resultaba relevante, ya que los socios de las cooperativas de trabajo representaban más del 75% del total de los casi doscientos treinta mil puestos de trabajo generados en todo el sector cooperativo. Pero a su vez, el 70% de dichas cooperativas de trabajo (3.700 cooperativas) habían sido creadas en el marco de programas públicos de hábitat o desarrollo local.¹⁵ Sin embargo, en este último caso, la evidencia empírica de tipo cualitativo indica que estos números pueden estar ocultando realidades mucho más complejas y problemáticas, tal como la transitoriedad de cooperativas de este tipo una vez que concluyen las obras encaradas para dichos planes y programas.

¹⁵ En orden de importancia, según el número de cooperativas creadas, son: Programa Federal de Emergencia Habitacional, Centros de Integración Comunitaria, Plan Agua Más Trabajo, Plan Manos a la Obra, Obra Pública Municipal.

De igual modo se destaca la importancia de las experiencias provenientes de empresas en situación de crisis (quiebra, cierre o graves incumplimientos del contrato salarial) que fueron recuperadas por sus trabajadores dándoles continuidad operativa con el objetivo principal de preservar fuentes de trabajo. Si bien este proceso se desarrolló tempranamente en países como Italia o España (entre fines de 1970 y la década siguiente), en la Argentina tuvo su mayor apogeo en los años centrales de la crisis (desde fines de la década de 1990 y, sobre todo, entre los años 2000 y 2002), pero también se registra una nueva emergencia, aunque de menor dimensión relativa, con los coletazos de la actual crisis internacional. Es así que, como puede apreciarse en el gráfico 1, que el pico de ocupaciones que dieron origen a estas experiencias se concentran en los principales años de dicha crisis. En tal sentido, si bien las empresas recuperadas son consecuencia fundamental de los efectos negativos sobre la continuidad laboral que generan las crisis capitalistas, también han tenido un peso específico los antecedentes de organización y de lucha previa de los trabajadores, así como la propia experiencia social del proceso de recuperación de empresa de todos estos años, tal como lo muestran las recuperaciones registradas en años más recientes.

Gráfico1. Distribución del número de recuperaciones de empresa por año de origen



Fuente: Rebón y Salgado (2009).

Luego del apogeo del proceso de recuperación de los años centrales de la crisis, se calcula que actualmente existen unas 150 empresas recuperadas que generan más de diez mil puestos de trabajo. El proceso muestra en sí que la autogestión de los trabajadores logró aquello que la gestión del capital se declaró incapaz de hacer: la

continuidad productiva de las propias empresas. No obstante, pasados los años de apogeo del proceso, en términos generales los desafíos actuales también resultan significativos y entre otros logros implican: el pase de propiedad de las empresas a manos de los trabajadores (se calcula que aproximadamente un tercio de las que están en vigencia lo han logrado), el mejoramiento de su capacidad productiva, capitalización e innovación tecnológica, la ampliación de su inserción de mercados, o el fortalecimiento de sus cuadros técnicos y dirigenciales.

En tal sentido, durante los últimos años surgieron instancias gubernamentales de apoyo a las empresas recuperadas, particularmente dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, así como proyectos de cooperación internacional que han buscado impulsar las capacidades de organización colectiva, el mejoramiento productivo y la inserción territorial, tal como lo hace el proyecto que se sintetiza en el cuadro 7.

Cuadro 7

Proyecto Redes de Empresas Recuperadas

El Proyecto Redes de Empresas y Redes de Personas, programa de fortalecimiento del sector de Empresas Recuperadas en la Argentina como factor de desarrollo local de la zona sur del Gran Buenos Aires (Berazategui, Florencia Varela y Quilmes) se propone promover la generación de empleo y el ingreso de la población ocupada precarizada, subempleada y desempleada de dichos municipios.

Son sus destinatarios directos unos 300 trabajadores de 12 empresas recuperadas de la zona sur del Gran Buenos Aires (GBA) involucrados en el Consorcio Productivo del Sur; más de 600 trabajadores de otras 18 empresas recuperadas del GBA; 150 jóvenes y 200 mujeres seleccionados entre los familiares de los trabajadores de las empresas recuperadas o vinculados al entorno social y geográfico de estas.

El Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las empresas recuperadas participantes así como del Consorcio Productivo del Sur que conformaron, brindando formación, asistencia técnica, acompañamiento institucional, encuentros y viajes de intercambio de experiencias. Asimismo, en 2007 se inauguró la Unidad de Gestión de Diseño Industrial (UGDI), la cual brinda servicios de diseño industrial, gráfica, e ingeniería de producto, puntos de venta y diseño.

Entidades promotoras: COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, Italia), MLAL (Movimento Laici America Latina, Italia), FUNDEMOS-UOM (Fundación para el estudio y el rol del movimiento obrero en la democracia y la transformación social, Argentina).

COSPE Conosur y FUNDEMOS participan a su vez en la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Quilmes.

Fuente: <www.proyectoredes.com.ar>, <www.cospe.org.ar>.

Una cuestión importante desde el punto de vista organizativo es la búsqueda de incorporar estas experiencias de nuevo cooperativismo de trabajo dentro de los espacios institucionalizados, sea por caso dentro de algunas federaciones del movimiento cooperativo o de las estrategias o estructuras del movimiento sindical¹⁶ y más aún la reciente confluencia organizativa del cooperativismo de trabajo con la conformación de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).

Cuadro 8

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)

Recientemente se conformó la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), con la integración de 21 federaciones de cooperativas de trabajo (FECOTRA, FACTA, FECOOAPORT, FECOTRAUN Florencio Varela, FECOTRAUN Corrientes, ANTA, FECOTRAR, FERYCOOTRA, Padre Carlos Mugica, Federación Evita, Reconquista, FECOSOL, FECO Santa Cruz, COTRAFER; ADICCRA; IFICOTRA, Federación Obra Padre Mugica, UMSCOOP, FEDERART, Red Gráfica). La confluencia organizativa del cooperativismo de trabajo constituye un hecho de relevancia, dado su creciente peso en las últimas décadas y la desarticulación histórica en su conformación. Esa confluencia, además de permitir mejores condiciones para la defensa reivindicativa del sector, constituye una plataforma organizativa más propicia para la articulación y negociación con el Estado y para avanzar en propuestas de legislación y normativas más adecuadas al desarrollo del sector.

Consideraciones finales

Llegados a este punto resulta conveniente concluir presentando un paneo de las principales actividades de las nuevas iniciativas socioeconómicas y sus orígenes en el caso argentino.

En tal sentido, estas han tenido mayor potencialidad de desarrollo en algunas áreas y actividades económicas en particular, entre las que pueden destacarse: a) producción o servicios desarrollados por medianos y grandes establecimientos originados en las experiencias de empresas recuperadas por sus trabajadores; b) articulación asociativa en la producción, logística o distribución entre productores de pequeña escala, manufacturas locales, formas de producción artesanales, etc.; c) construcción, reparación, mantenimiento y refacción de viviendas, centros comunales, infraestructura de servicios y autoconstrucción colectiva, particularmente con algunas experiencias que se desarrollan en el marco de los programas públicos ya señalados de hábitat e infraestructura;

¹⁶ Tal el caso de la conformación del ANTA (Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados) dentro de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) o del papel de la Unión Obrera Metalúrgica Regional Quilmes, en el apoyo y fortalecimiento a las empresas recuperadas del sur del Gran Buenos Aires.

d) gestión de servicios sociales, tales como comedores comunitarios, centros socioculturales y recreativos, asistencia socioeducativa; e) canalización de financiamiento y ahorros hacia finanzas solidarias, entre los que se destacan los programas de microcrédito; f) mercados sociales, ferias francas, redes de trueque y algunas experiencias de comercio justo; g) protección del medioambiente, recolección y reciclaje de residuos, en particular en zonas urbanas con elevada degradación socioambiental; h) iniciativas emergentes en servicios personales que, si bien aún no tienen la dimensión que en otros países, muestran alternativas de interés en servicios tales como cuidado domiciliarios de ancianos o personas minusválidas; atención terapéutica, tratamiento de adicciones, etc.; i) medios de comunicación social y comunitaria, los cuales pueden tener una mayor incidencia con la creciente vinculación en red entre ellas y más aún en el marco de la nueva Ley de Medios de Comunicación; j) experiencias de grupos y redes de consumidores de la ESS, las cuales, si bien hasta ahora constituyen experiencias muy puntuales, muestran caminos para avanzar en un área de mucha potencialidad, como es el consumo solidario y responsable.

Estas experiencias de la nueva economía social comparten, en mayor o menor grado, una serie de características distintivas, como por ejemplo: nuevas denominaciones que las identifican: empresas recuperadas, empresas sociales, emprendimientos sociales o comunitarios, programas y organizaciones de microcrédito, redes asociativas, entre otras; diversidad de actores comprometidos: trabajadores autogestionarios, destinatarios, voluntarios, comunidad local, promotores sociales o gubernamentales, militantes; revaloración del espacio público en la sociedad civil y del asociacionismo en red para desarrollar y expandir a los emprendimientos socioeconómicos; combinación (hibridación) de fuentes de financiamiento basada en principios de intercambio mercantil (sobre todo en mercados privados, aunque con algunas experiencias en mercados públicos); reciprocidad (donaciones y aportes voluntarios); redistribución de recursos público estatales; proyección simultánea en las dimensiones económica, social y política, particularmente con el crecimiento de formas organizativas en red; algún tipo de combinación entre satisfacción de intereses sociales de sus miembros, beneficios para la comunidad y construcción de identidad colectiva; importancia de la territorialidad, lo comunitario y lo local.

Por último, pueden distinguirse distintos tipos de tradiciones colectivas que han dado origen a esta nueva economía social, entre las que rescatamos seis: experiencias autogestionarias de trabajadores organizados con el objetivo de mantener o crear fuentes de

trabajo, tal es el caso particular de las empresas recuperadas, así como una parte de las nuevas cooperativas de trabajo; iniciativas asociativas de pequeños productores o de emprendimientos de la economía popular con la finalidad de fortalecer sus capacidades organizativas, técnicas, comerciales y de acceso a recursos; acciones y formas organizativas desarrolladas por agrupamientos de base o asociaciones de ciudadanos, para atender necesidades sociales emergentes en sus comunidades, barrios o territorios; emprendimientos promovidos por entidades de apoyo, servicios socioprofesionales o grupos de ciudadanos, con la finalidad de favorecer la integración social de sectores vulnerables; prácticas socioeconómicas impulsadas desde organizaciones sociopolíticas o sindicales, o movimientos sociales con objetivos de construcción organizativa y poder económico y social; experiencias que se originaron fundamentalmente a partir de programas y políticas públicas que han sido promovidos por el Estado nacional, provincial o local.

Considerando que la expansión y crecimiento de este tipo de emprendimientos y organizaciones ha puesto en tensión a las estructuras más tradicionales de la socioeconomía, así como a las entidades tradicionales de la sociedad civil, se potencia la necesidad de reconfigurar la identidad, su finalidad, sus formas organizativas y reconocimiento legal. Esa construcción de identidades colectivas compartidas requiere también potenciar confluencias organizativas que, reconociendo la diversidad y riqueza de las distintas trayectorias, avance en procesos de representación colectiva unificada del sector para ganar en capacidades de negociación e incidencia política. Al mismo tiempo, resulta un desafío potenciar el fortalecimiento económico del sector, facilitando también el acceso a conocimientos y tecnologías apropiadas y socialmente útiles. En este último caso, la consolidación y expansión del sector necesita del aumento de las capacidades técnicas, productivas, tecnológicas, económicas y comerciales. De allí también la importancia de profundizar el vínculo con el sistema científico-técnico y, en particular, con las universidades públicas, con las cuales se vienen desarrollando avances de significación.

En definitiva, en este paneo se observa un conjunto de experiencias que, con sus avances y desafíos por afrontar, enseñan un camino ya emprendido y por fortalecer aún de ESS que, liberando las energías del trabajo y las relaciones humanas, aúna economía y necesidades sociales, riqueza y trabajo, intercambio y solidaridad, fuerzas sociales y capacidades personales. Es decir, una realidad social en construcción en la búsqueda de edificar una sociedad cultural, económica y socialmente más justa e inclusiva.

Referencias bibliográficas

- Bastidas-Delgado y M. Richer (2001), "Economía social y economía solidaria: intento de definición", *Cayapa. Revista Venezolana de Economía Social*, año 1, N° 1, Caracas.
- Braun, O. y L. Joy (1981), "Un modelo de estancamiento económico. Estudio de caso sobre la economía argentina", *Desarrollo Económico*, N° 80, Buenos Aires.
- CEPAL (2008a), *Panorama social de América Latina 2008*, Santiago de Chile, CEPAL.
- (2008b), *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2008*, Santiago de Chile, CEPAL.
- Chaves, R. (2003a), "La economía social como enfoque metodológico, como objeto de estudio y como disciplina científica", en Vuotto, M., *Economía social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas*, Buenos Aires, UNGS-Altamira-Fundación OSDE.
- (2003b), "El cooperativismo en la historia de la literatura económica", en Monzón, J. L. y A. Sajardo (2003), *Elementos de economía social. Teoría y realidad*, Valencia, Universidad de Valencia.
- Diamand, M. (1972), "La estructura productiva desequilibrada en Argentina y el tipo de cambio", *Desarrollo Económico*, N° 45.
- FADU (s/f), "Informe diagnóstico: 'Estudio de caso. El sur del conurbano bonaerense', Inclusión urbana", FADU-UBA. Disponible en <www.inclusionurbana.com.ar/Diagnostico.PDF>.
- Higa (2008), "El sector de las microfinanzas en la Argentina. Situación actual, escenarios y desafíos", Jornada Anual de Microfinanzas Argentina 2008: impulsando la confianza como condición para el crecimiento y la sostenibilidad, Fundación Andares y Red Argentina de Instituciones de Microcrédito, Buenos Aires, 14 y 15 octubre 2008.
- Kosacoff, B. (2009), "La crisis global económica y sus efectos en Argentina", Buenos Aires, ASAP. Disponible en <www.eclac.org/argentina/default.asp>.
- Lévesque, B. y M. Mendell (2003), "La economía social en Québec: elementos teóricos y empíricos para el debate y la investigación", en Vuotto, M. (2003), *Economía social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas*, Buenos Aires, UNGS-Altamira-Fundación OSDE.
- Ministerio de Desarrollo Social (2008), "Sistematización de las prácticas del Banco Popular de la Buena Fe del 2002 al 2007", Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social.
- Observatorio de la Deuda Social Argentina (2009), *Barómetro de la deuda social argentina*, N° 5, Buenos Aires, UCA.
- OIT (2009a), *Tendencias mundiales del empleo*, Ginebra, International Labour Office.
- (2009b), *Reporte laboral 2008 América Latina y el Caribe*, Lima, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
- Pastore, R. (2009), "Estudio diagnóstico de empresas sociales" (con la colaboración de Sena, S. y F. Bejarano), documento de trabajo para el Proyecto Redes de Empresas-Redes de Personas: Programa de apoyo al fortalecimiento del sector de empresas sociales en Argentina.

- (2006), “Diversidad de trayectorias, aproximación conceptual y pluralidad de proyectos de la economía social”, Buenos Aires, documento del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
- Portantiero, J. C. (1973), “Clases dominantes y crisis política”, *Pasado y Presente*, nueva serie, N° 1, año 4, abril/junio.
- Rebón, J. y R. Salgado (2009), “Desafíos emergentes de las empresas recuperadas: de la imposibilidad teórica a la práctica de la posibilidad”, *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, N° 119, septiembre. Disponible en <<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/>>.

(Evaluado el 5 de julio de 2010.)

Autor

Rodolfo E. Pastore. Licenciado en Economía (UBA), Diploma de Estudios Avanzados (estudios de doctorado) en Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director de proyectos de investigación y extensión en economía social.

Publicaciones recientes:

- , “Vinculación universidad-cooperación internacional para el desarrollo local y la economía social: la relación entre el PICT y la Universidad Nacional de Quilmes”, en Cipriani, A. (comp.), *PICT (Programa de asistencia técnica integral Italia-Argentina)*, Buenos Aires, Cooperación Italiana, Oficina de Cooperación de la Embajada de Italia en la Argentina, pp. 129-147, 2008.
- , “Proyecto integral de desarrollo socio-productivo en la ciudad de Quilmes. Articulación municipio, universidad y actores locales”, *DEL, Diálogo Económico Local*, publicación de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local de la Red Mercociudades, N° 6, Rosario, noviembre, 2007.
- , “Diversidad de trayectorias, aproximación conceptual y pluralidad de proyectos de la Economía Social”, Buenos Aires, Documento 54 del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, septiembre, 2006.

Cómo citar este artículo:

Pastore, Rodolfo E., “Un panorama del resurgimiento de la economía social y solidaria en la Argentina”, *Revista de Ciencias Sociales, segunda época*, año 2, N° 18, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, primavera de 2010, pp. 47-74.